



Mauro Muñoz

El gran proceso de la colza

De entre todos los dramáticos temas que enmarcan la realidad española de 1987 –el paro, el movimiento estudiantil emergente, la erradicación del asociacionismo agrario libre, la exclusión de la representatividad independiente sindical, el electoralismo ante las municipales y autonómicas, etc.–, surge, como un coloso de sangre, el drama pendiente de la colza, que tendrá un espectacular proceso con espectadores internacionales. En ese proceso, que se desarrollará a partir de marzo, no sólo asistiremos a interminables acusaciones y contraindicaciones que intenten eludir la necesaria responsabilidad penal; la discusión de la interpretación científica y médica de un fenómeno todavía no esclarecido, pero de consecuencias sociales incalculables; y, sobre todo, a un retrato profundo de la situación de nuestra convivencia democrática. En el drama de la colza estamos todos implicados, unos más directamente que otros, pero todos. El partido en el poder hizo, en su día, en septiembre de 1981, una capitalización política parlamentaria para dar el salto al poder desde una herida todavía aún no restañada. Se hicieron reclamaciones políticas al Gobierno y ello con una base cierta, porque la responsabilidad del Estado en estos asuntos es clara. Los medios de comunicación controlados, por otra parte, sirvieron de instrumento para macerar a la opinión pública en la dirección a mantener un repudio permanente a los gobernantes de UCD. Pero esa sensibilidad, posible en el marco democrático, no se mantuvo después de las elecciones generales del 82 y el PSOE fue muy olvidadizo con las obligaciones de solidaridad contraídas. Cinco años después, más de 24.000 personas afectadas, protestan, desde su dolor incabable, por la falta de atención y por el olvido en

De víctimas, los enfermos de la colza, han pasado a ser para la Administración socialista, unos apestados

Este proceso es un proceso al corazón de la sociedad española

que se las tiene. De víctimas, los enfermos de la colza han pasado a ser, para la Administración, unos apestados. No tienen acceso a los medios informativos del Estado, para proclamar y plantear sus reivindicaciones. Personas mayores y niños, viven pendientes todavía, desde aquel tremendo suceso, de que el poder político ejerza sobre ellos,

por ellos, para ellos, los derechos de protección plena suscritos en la Constitución, precisamente de todos. Hay responsabilidades penales ineludibles. Hay incógnitas científicas. Hay responsabilidades políticas para el Gobierno que estaba en el momento del suceso y para los gobiernos posteriores. Y hay también, por encima de estos niveles, una acusación de indiferencia, de dureza, de rechazo, de inconvivencia,

que afectan a la sociedad en general. Todos somos responsables. No ha habido, hay que decirlo con dolor culpable, un movimiento de fraternidad con quienes padecen este mal incurable.

El Gobierno debe abrir, paralelamente al ejercicio de la justicia, un debate político con todas las consecuencias anteriores y posteriores que se deriven de la situación. No vale para los socialistas haber instrumentado una campaña, aunque fuera con bases reales y ciertas, si no acepta también el hoy de inasistencia que cerca en un *gheto* a nuestros

hermanos de la colza.

Asociaciones, entidades sociales, Cruz Roja, comunidad religiosa, todos nosotros, como sociedad, debemos plantearnos el testimonio de estos seres como un grito de socorro que es preciso atender, hasta ahora desoído. Los gritos de la colza no deben ser los del silencio. Este proceso, que grabará indeleblemente la primavera del 87 es, no nos llevemos a engaño, un proceso al corazón de la sociedad española.